



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

455
FORMA A-55
455

**CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C
SUSCITADO ENTRE EL TITULAR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN Y AARÓN ROBERTO
MARISCAL VALENCIA.**

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al
lunes diecisiete de mayo de dos mil diez.



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SALA DE ACUERDOS

**VISTOS; Y,
RESULTANDO:**

PRIMERO. El titular de la Dirección General de Personal
de este Alto Tribunal mediante escrito presentado ante la mesa
de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora
Única del Poder Judicial de la Federación el doce de mayo de
dos mil ocho demandó la terminación de los efectos del
nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia.

SEGUNDO. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil
ocho, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión
Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación
admitió la demanda laboral y ordenó la formación del

expediente respectivo, el que se registró con el número 2/2008-C; tuvo al titular de la Dirección General de Personal de este Alto Tribunal formulando demanda laboral; por señalado el domicilio que indicó para oír y recibir notificaciones, por designado a su apoderado legal y por autorizados a los licenciados que señaló; asimismo, tuvo por ofrecidas las pruebas que describió en su escrito de demanda, reservándose acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno, en términos del artículo 132 de la referida ley burocrática.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 127 bis, fracción II y 136 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenó emplazar y correr traslado al demandado en este conflicto de trabajo para que en el plazo de nueve días hábiles contado a partir del siguiente al en que le fuera notificado el acuerdo citado diera contestación a la demanda laboral instaurada en su contra, apercibido que de no hacerlo en el lapso que se le concedió o resultar ilegalmente representado, se tendría por contestada la misma en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.

SUPP
JUST
SECRET

TERCERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil ocho ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, Aarón Roberto Mariscal Valencia contestó la demanda dentro del término legal concedido, por lo que en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

proveído de tres de junio de dos mil ocho, se le tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma legales y por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer; se ordenó correr traslado al actor con copia de la referida contestación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.

CUARTO. Por auto de once de mayo de dos mil nueve, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, declaró procedente la excusa planteada por el representante del Sindicato, y se determinó que en su lugar intervenga, para la resolución de este asunto, el licenciado René Díaz Nárez.

QUINTO. El doce de junio de dos mil ocho se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que se suspendió en atención al incidente de falta de personalidad planteado por la parte demandada tanto al inicio de la contestación a la demanda como en esa audiencia.

SEXTO. Se tramitó el incidente de falta de personalidad planteado y por resolución de doce de mayo del dos mil nueve se desechó por extemporáneo, por lo que mediante acuerdo de nueve de julio de ese año se continuó con el procedimiento en el presente asunto.

SÉPTIMO. El veintiocho de agosto de dos mil nueve se celebró la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en la que se admitieron las pruebas de las partes que cumplieron sus respectivos requisitos legales y se desecharon las que no los cumplieron.

OCTAVO. Una vez desahogadas las pruebas admitidas, por auto de treinta de noviembre de dos mil nueve se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar el expediente a la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para la formulación del proyecto de dictamen respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este conflicto laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que se trata de un conflicto de trabajo promovido por el titular de un área administrativa de este Alto Tribunal contra un trabajador que presta sus servicios en el mismo, respecto de quien

SUPREMA
CORTA DE JUSTICIA
SECRETARIA L.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reclama la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento otorgado; y, además, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y emitió el dictamen a ~~que~~ se refiere el artículo 153 de este último ordenamiento legal y 1º del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Como cuestión previa, es pertinente señalar que el actor titular de la Dirección General de Personal de este Alto Tribunal, demandó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento conferido a Aarón Roberto Mariscal Valencia de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, en la plaza número 1885, adscrito a la Dirección General Adjunta de Documentación Jurídica perteneciente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal ya que el nueve de mayo de dos mil siete, se dictó sentencia por la Juez Décimo Séptimo de lo Penal del Distrito Federal en la causa penal 331/2005 instruída en contra del referido servidor público, en la que se le condenó a una pena de seis años, ocho meses de prisión; resolución que fue confirmada por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca de apelación 754/2007 y que causó estado por auto de seis de agosto de dos mil siete, lo que actualiza la causa de cese

prevista en el artículo 46, fracción V, inciso j) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

A su vez, Aarón Roberto Mariscal Valencia, opuso las siguientes excepciones:

1. La de falta de acción y derecho ya que la presentación de la demanda laboral correspondía a la Directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes y no al Director General de Personal que carecía de personalidad para ello.

Asimismo, se opuso en este apartado la excepción de falta de legitimación procesal activa dado que el Director General de Personal no puede representar ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. La de oscuridad e imprecisión de la demanda, pues la actora no señala porqué razón no instrumentó la acción legal correspondiente, además es omisa en señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales no se pronunció legalmente sobre el derecho de petición que se le hizo sobre la reincorporación de Aarón Roberto Mariscal Valencia a su plaza de trabajo, asimismo, de manera vaga y obscura no señala los motivos por los cuales dejaba sin efecto

SUPLENTE
JUSTI
SECRET



48
FORMA A-55
458

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la suspensión temporal a la que se encontraba sujeto el demandado.

3. La de prescripción, pues entre la fecha en que se incurrió en la causal que se le atribuye y la fecha en que se señaló la verificación del levantamiento de acta administrativa, transcurrieron más de cuatro meses, sin que el titular de la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis llevara a cabo acto alguno de autoridad tendente a disciplinar o sancionar la conducta que se actualizaba.

4. La de sine actione agis, ya que aun cuando no constituye propiamente una excepción, implica la negación de la demanda y la reversión de la carga de la prueba a la parte actora.

En ese orden de ideas, debe abordarse el estudio de la litis principal en el presente conflicto laboral, acorde con las pretensiones y excepciones antes sintetizadas, esto es, si asiste acción y derecho al actor en solicitar la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia.

TERCERO. El trabajador Aarón Roberto Mariscal Valencia, al contestar la demanda laboral instaurada en su contra, opuso, entre otras, como primera de sus excepciones, la siguiente:



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS

“SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE ACCIÓN Y DERECHO (sic). En cuanto a los hechos señalados en los puntos 48, 49, 51, 54 y 56 consistentes en que el Director General de Personal haya sido el encargado de levantar el acta administrativa en contra del suscrito, así como el de haber presentado dicho servidor público la presente demanda laboral, lo que resulta improcedente ya que tales acciones legales correspondían (sic) realizarlas a la Directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, resultando inexacta su apreciación en el sentido que la presente demanda laboral no correspondía a algún conflicto suscitado entre dicha titular con el suscrito, sino por una causa que se deriva de una sentencia condenatoria.

SUPP
JUS
SECR.

Lo anterior resulta infundado e indebido ya que al margen del conflicto que se aduce, lo cierto es que la ley reglamentaria así como el Acuerdo General de Administración I/2007, no exigen la existencia de conflicto alguno para poder determinar quién tiene acción y derecho para sancionar, disciplinar y solicitar el cese del nombramiento de un trabajador, sino que es clara al señalar que el superior del área en cuanto tenga la presunción de que un empleado ha incurrido en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

alguna de las causales previstas en la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, deberá implementar las investigaciones por su cuenta tendientes a acreditar la responsabilidad de dicho empleado o servidor público y en su caso realizar la demanda laboral tendiente a solicitar el cese del nombramiento del empleado cuya conducta se encuadre en alguna de dichas causales. Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 32 del Acuerdo General de Administración I/2007, en su párrafo segundo establece: 'Cuando el titular del órgano al que se encuentre adscrito el servidor público, presuma que el trabajador ha incurrido en una conducta que pudiera configurar alguna de las causales contempladas en la fracción V de la ley reglamentaria (sic) deberá realizar por su cuenta la investigación correspondiente y recabar los elementos probatorios... que permitan determinar su responsabilidad... así como la necesidad de instruir en su contra el procedimiento laboral establecido en este acuerdo...' Por su parte el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al respecto es precisa al señalar 'Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar el acta



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS.

administrativa...' **De igual forma, el artículo 33 del Acuerdo General de Administración I/2007, establece:** '*... Cuando el titular del órgano de adscripción haya determinado la presunta responsabilidad del trabajador en una conducta que podría configurar una de las causales de cese previstas en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria instruirá en su contra el procedimiento laboral...*' **Siendo oportuno destacar que de los diversos hechos afirmados precisamente por la parte actora, se desprende que la Directora de la Dirección del Centro de Documentación y Análisis, en todo momento contó con la información necesaria para instruir legalmente lo procedente en derecho; sin embargo, en desatención a su responsabilidad y debido ejercicio público que la ley le facultaba, fue omisa en realizarlo; en tal virtud se considera (sic) improcedentes las afirmaciones que realiza la parte actora a fin de justificar la titularidad del acto que interpone."**

SUPP
JUS
SECR 14

Posteriormente, en la audiencia de doce de junio de dos mil ocho, el apoderado de la parte demandada, precisó:



CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“... Asimismo, en cuanto al incidente de falta de personalidad de la parte actora a que se hace alusión al inicio de la contestación a la demanda éste resulta procedente en virtud de que: A) El promovente, licenciado Manuel Juan Corvera Caraza, es titular de la Dirección General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B) Dicha persona según lo asentado en el escrito de demanda actúa en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y solicita el cese y terminación de los efectos del nombramiento de Aaron Roberto Mariscal Valencia. Ahora bien, para que el precitado licenciado Manuel Juan Corvera Caraza pudiese accionar como pretende hacerlo a nombre y representación del presidente, debió acompañar a su escrito inicial el oficio a que se contrae el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello con independencia de que sea el titular de la Dirección de Personal del más Alto Tribunal, puesto que si con ese carácter está facultado para demandar como pretende, debió hacerlo precisamente en su calidad de Director de Personal y no a nombre del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sobre todo que del texto del escrito de demanda se observa que según dicho director está



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS.

legitimado para demandar a nombre del titular de área en que se desempeñaba el prestador de servicios. Sin embargo, como textualmente aduce que actúa a nombre y en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que carece de representación porque, se reitera, no ofreció el oficio como obliga el numeral invocado, sin que la disposición legal en comento pueda ser superada por Acuerdo General o Reglamento alguno, como se alega, toda vez que ninguno de tales ordenamientos puede estar por encima de la Ley. Atento a lo anterior, es evidente que al no acreditar la personalidad con que se ostenta, es incuestionable que la demanda presentada por el Director de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe dársele trámite.”

SECRETARÍA
SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARÍA

De lo señalado en la contestación de demanda así como de la audiencia de doce de junio de dos mil ocho, se desprende que el incidente de falta de personalidad promovido por la parte demandada se sostiene, esencialmente, en los siguientes argumentos:

a) El Director General de Personal de este Alto Tribunal no tiene facultades para presentar la demanda laboral y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

solicitar el cese del nombramiento del demandado, pues tal acción correspondía a la Directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

b) El licenciado Manuel Juan Corvera Caraza señaló que es Director General de Personal al presentar su demanda laboral y precisó que actúa en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, **no acompañó a su escrito inicial el oficio a que se contrae el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado**, con independencia de que sea el titular de la Dirección General de Personal ya que señala que actúa en representación del Presidente de este Alto Tribunal.



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS.

En relación con el planteamiento sintetizado en el inciso a), cabe señalar que el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹, indica que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, entre otras atribuciones, la de representar a este Alto Tribunal y llevar su administración.

Asimismo, las fracciones I y II del artículo 34 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la

¹ "Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:
I. Representar a la Suprema Corte de Justicia y llevar su administración; (...)."

Nación² prevén que serán atribuciones del Presidente de este Alto Tribunal, entre otras, la de representar y administrar a la Suprema Corte, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica, así como delegar sus atribuciones de representación de la Suprema Corte en los servidores públicos que estime convenientes para ello.

Además, el artículo 133³ del referido Reglamento Interior prevé que al titular de la Dirección General de Personal **le corresponde representar a este Alto Tribunal ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación cuando así sea requerido, sin perjuicio de las atribuciones encomendadas expresamente a otras áreas de la Suprema Corte.**

En ese contexto normativo, si la relación laboral respectiva se entabló con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia de que esa relación se pueda entender

² “**Artículo 34.** Serán atribuciones del Presidente, además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica, las siguientes:

I. Representar y administrar a la Suprema Corte, conforme a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica, debiendo observar, en el ejercicio de esas facultades, los lineamientos generales que emita el Pleno y los Acuerdos tomados por los Comités;
II. Delegar sus atribuciones de representación de la Suprema Corte en los servidores públicos que estime convenientes para ello; (...).”

³ “**Artículo 133.** La Dirección General de Personal tendrá las siguientes atribuciones:

(...) XIV. Representar a la Suprema Corte, cuando así sea requerido, ante la Comisión Substanciadora, sin perjuicio de las atribuciones encomendadas expresamente a otras áreas de la Suprema Corte; y (...)”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

entablada por conducto del titular del órgano de adscripción⁴, legalmente debe reconocerse que el titular de la Dirección General de Personal, previo requerimiento, puede representar a ese Alto Tribunal ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, máxime que el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación designó al referido Director General para que lo representara ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación en el asunto en estudio.



MA CORTE DE
A DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS

En efecto, mediante oficio SEAJ/854-JDOR/2007, que obra agregado a fojas 50 a 54 del expediente laboral, se requirió a la Dirección General de Personal para que "en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúe en ese conflicto de trabajo...".

⁴ Así deriva de lo previsto en el artículo 4º de las Condiciones Generales de Trabajo que señala: "Artículo 4. La relación laboral se entenderá establecida entre el servidor público y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del titular del órgano para el que aquél directamente preste sus servicios.

En caso de que se suscite algún conflicto de trabajo, serán los titulares quienes actuarán en representación de la Suprema Corte. Tratándose de servidores públicos adscritos a las Salas, la representación respectiva recaerá en el Secretario de Acuerdos de la Sala que corresponda.

Los titulares que acudan a un juicio en materia laboral en representación de la Suprema Corte podrán solicitar el apoyo de la Oficialía Mayor, la cual instruirá a un asesor de la Dirección General de Personal para tales efectos.

Dicha relación laboral se regirá por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal de Trabajo, así como los acuerdos y demás disposiciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Por ende, **debe estimarse que con ello se acredita la legitimación** (denominada inexactamente de personalidad) de ese órgano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comparecer al juicio laboral a demandar la conclusión de los efectos del nombramiento del demandado Aarón Roberto Mariscal Valencia.

Cabe destacar que dicho oficio fue suscrito por el titular de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, órgano al cual corresponde en representación de la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promover juicios derivados de las relaciones jurídicas que ésta entable, tanto investida de imperio como desprovista de éste⁵, por lo que al no distinguirse en esa normativa sobre la naturaleza de los juicios en los cuales puede representar a ese Alto Tribunal debe estimarse que goza de la capacidad procesal para realizar el requerimiento al que se refiere el artículo 133 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁵ Lo anterior se desprende de lo previsto en el artículo del artículo 153, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "Artículo 153. La Suprema Corte contará con una Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que tendrá las siguientes atribuciones: ... I. En representación de la administración de la Suprema Corte promover juicios derivados de las relaciones jurídicas que ésta entable, tanto investida de imperio como desprovista de éste, por lo que podrá ejercer acciones, oponer excepciones, reconvenir, formular denuncias y querellas; coadyuvar con el Ministerio Público de la Federación en los casos en los que se encuentre involucrada la Suprema Corte; y, desistir de los juicios o medios de defensa y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del Pleno, el Presidente o el Comité de Gobierno y Administración; ...".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por ello, si en la fracción XIV del artículo 133 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se condiciona la **legitimación** de la Dirección General de Personal al simple hecho de que se le haya requerido su participación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación y el Presidente de este Alto Tribunal lo designó para que lo representara ante esa Comisión Substanciadora, debe estimarse que **el referido oficio fue suficiente para que el titular de la Dirección General de Personal gozara de la respectiva capacidad procesal.**

Por otra parte, también resulta infundado el diverso argumento que hace valer el apoderado de la parte demandada en la audiencia de doce de junio de dos mil ocho, por virtud del cual interpuso incidente de falta de personalidad, al señalar que el licenciado Manuel Juan Corvera Caraza, en su demanda laboral precisó que es Director General de Personal y sostuvo que actúa en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero no acompañó a su escrito inicial el oficio a que se contrae el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con independencia de que sea el titular de la Dirección General de Personal, ya que señala que actúa en representación del Presidente de este Alto Tribunal.



TE DE
NACION
ACUERDOS.

Al respecto cabe mencionar que **en el caso no resulta aplicable el artículo 134, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado**, conforme al cual los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio, lo anterior en virtud de que el referido dispositivo se relaciona con lo establecido en el artículo 2° del propio ordenamiento, el cual como ya se precisó nada dice sobre qué titulares de los órganos del Poder Judicial de la Federación son el conducto a través del cual se entiende establecida la respectiva relación laboral, de ahí que si la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce al Director General de Personal **la capacidad** para acudir en nombre de este Alto Tribunal ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación **resulta innecesaria la presentación de oficio alguno, ya que no acudió ante ésta como apoderado** sino en virtud de una representación normativa que le reconoce el artículo 133 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SU
JU
SECR

En ese tenor, si en términos del artículo 133 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Director General de Personal le corresponde representar a este Alto Tribunal ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, condicionada dicha **legitimación procesal** al hecho de que sea



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

requerido, debe estimarse que basta con que se le haya requerido ejercer la representación de este Alto Tribunal.

No es obstáculo a esta determinación el hecho de que en la promoción respectiva el Director General de Personal se haya ostentado como representante del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que aun cuando se le hubiera requerido acudir a juicio por instrucciones del Ministro Presidente, ello no impide desconocer que **normativamente está investido de la atribución para acudir a juicio en representación de este Alto Tribunal.**



LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
EMITE LOS ACUERDOS.

Por lo anterior, resulta inexacto lo aducido por el promovente incidentista dado que en el caso concreto el Director General de Personal conforme a lo previsto en el artículo 133, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede representar ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación a este Alto Tribunal y en ese supuesto dicha participación, incluso, se le requirió mediante el oficio SEAJ/854-JDOR/2007, por un órgano de la Suprema Corte que también goza de la representación de ésta como deriva de la fracción I del artículo 153 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, dadas las consideraciones que anteceden, se impone concluir que resulta infundada la excepción de falta de legitimación (indebidamente denominado incidente de falta de personalidad) planteada por el demandado.

CUARTO. Tomando en cuenta que en la demanda laboral el actor, Director General de Personal, ejerce como prestación principal se le autorice para dar por terminados los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia como Profesional Operativo, rango F, puesto de base, en la plaza número 1885, adscrito a la Dirección General Adjunta de Documentación Jurídica perteneciente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal, y que el trabajador demandado al contestar la demanda opuso, entre otras excepciones, la de prescripción, es necesario analizar ésta en primer lugar por ser de estudio preferente en tanto tiene carácter perentorio e impeditivo desde el punto de vista procesal y, por ende, tiende a destruir la acción intentada, ya que de ser fundada haría innecesario el estudio de fondo del asunto.

SUPP
JUS
SECR

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada aplicable por analogía, que lleva por rubro, texto y datos de identificación:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO PREFERENTE DE LAS EXCEPCIONES DE. Las excepciones de cosa juzgada y de prescripción, tienen el carácter de impeditivas desde el punto de vista procesal, supuesto que tienden esencialmente a destruir la eficacia de la acción, independientemente de su justificación intrínseca; por tanto, si la Junta responsable absolvió a la empresa demandada, porque consideró que se habían acreditado las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por aquella, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo de la Junta, deben estudiarse primeramente las excepciones mencionadas, y solo en el caso de que se llegue a concluir que la autoridad debió considerarlas improcedentes, pueden estudiarse y decidirse las violaciones a las leyes de procedimiento, que se invoquen en la demanda de garantías.”

Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXVI, Página: 1620)

Al respecto, la parte demandada opuso la excepción de prescripción y precisó que el día nueve de mayo de dos mil siete se dictó sentencia condenatoria en la causa penal 331/200, por lo que desde el día diez de mayo de dos mil siete



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS.

transcurrieron los cuatro meses que prevé el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores.

Incluso, precisa que el diez de octubre de dos mil siete, solicitó a la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes su reincorporación laboral y dejar sin efectos la suspensión temporal a la que estaba sujeto, por lo que también desde esta fecha transcurrieron los cuatro meses a que se refiere el citado artículo 113 de la ley burocrática.

Ante ello, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en los artículos 112 a 114 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado existen dos clases de términos de prescripción en materia burocrática: genérica, cuando la ley establece el plazo de un año para ejercer las acciones que nazcan de la ley, del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijan las condiciones generales de trabajo y, específica, para lo cual se señalan diversos plazos de un mes y cuatro meses, atendiendo a circunstancias especiales según la hipótesis planteada.

Entre las prescripciones específicas, el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé la relativa a la de la facultad de los funcionarios para suspender,

SUPRE
JUS
SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas. En este supuesto, conforme a la fracción II, inciso c) de ese precepto, los funcionarios tienen cuatro meses contados a partir del momento en que son conocidas las causas, para demandar la terminación de los efectos del nombramiento. El referido numeral dispone:

“ARTÍCULO 113.- Prescriben:

I.- En un mes:

a) Las acciones para pedir la (sic) nulidad de un nombramiento, y

b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

II.- En cuatro meses:

a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y

c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS.

trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas.”

Del precepto transcrito se advierte que el término para que opere la prescripción para suspender, cesar o disciplinar a los trabajadores al servicio del Estado que la ley concede en la fracción II, inciso c), del citado artículo 113, es de cuatro meses y debe computarse a partir de la fecha en que el funcionario conoce las causas por las que se deba suspender, cesar o disciplinar al servidor público.

En esas condiciones, para estar en aptitud de pronunciarse respecto a si transcurrió o no el término prescriptivo a que se ha hecho referencia resulta indispensable conocer a partir de cuándo se conoció la causa para cesar al servidor público y para ello debe atenderse a lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, las constancias que obran en el expediente y a las pruebas ofrecidas por éstas en el presente conflicto de trabajo.



Al respecto, de autos se desprende que el once de septiembre de dos mil seis, Aarón Roberto Mariscal Valencia presentó escrito ante la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, en el que solicitó la suspensión temporal de su relación de trabajo dado que se encontraba detenido a disposición de autoridad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

judicial (foja 181 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

El mismo día once de septiembre de dos mil seis, mediante oficio DGP/DRL/245/2006, la Dirección General de Personal informó a la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes que la suspensión temporal de los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia surtía sus efectos a partir del ocho de septiembre de ese año y que en su momento se informara a esa Dirección General la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que absuelva al referido servidor público (foja 185 y 184 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS.

Mediante escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil siete, Aarón Roberto Mariscal Valencia informó a la referida Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, que el nueve de mayo de dos mil siete se dictó sentencia condenatoria en la causa penal 331/200, seguida ante el Juez Décimo Séptimo de lo Penal en el Distrito Federal, en la que se le declaró penalmente responsable por el delito de tentativa de homicidio calificado y que inconforme con esa resolución interpuso recurso de apelación ante la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (foja 202 y 203

del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

El diez de octubre de dos mil siete, Aarón Roberto Mariscal Valencia solicitó la reincorporación a sus labores y, en consecuencia, dejar sin efectos la suspensión temporal a la que estaba sujeto, sin que de ese escrito se advierta la existencia de alguna resolución dictada en el recurso de apelación que interpuso (foja 207 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

Posteriormente, previo requerimiento, Aarón Roberto Mariscal Valencia remitió, mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil siete, copia simple del tratamiento de externación contenido en el oficio SSG/DESP/4026/2007 de cinco de octubre de dos mil siete expedido por el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, en el que al parecer ese beneficio le fue otorgado a Aarón Roberto Mariscal Valencia, lo que no comprobó con prueba fehaciente dado que sólo exhibió ese documento en copia simple (fojas 210 a 214 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARÍA

En atención a lo anterior, la Dirección General de Personal solicitó a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mediante oficio DGP/0579/2007, opinión jurídica respecto al criterio a



163
FORMA A-55
468

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

seguir para la reinstalación de Aarón Roberto Mariscal Valencia, la que se emitió por parte de esa unidad jurídica mediante oficio SEAJ/2953/JDOR/2007 en la que se mencionó que era necesario contar con copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal que se le seguía al referido servidor público así como de las recaídas en los medios de defensa que se hubieran hecho valer contra la misma (fojas 217 a 222 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

Con base en lo anterior, la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes solicitó al ahora demandado por oficio CDAC-ADM-INT-82-2007 de trece de noviembre de dos mil siete, remitiera copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal que se le instauró y de las demás sentencias que en su caso hubieran recaído a los medios de defensa que hubiera hecho valer, sin que éste remitiera esos documentos (foja 224 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

Por su parte, la propia Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en ejercicio de sus facultades, mediante oficio SEAJ-MAAS/3142/2007, solicitó a la Juez Décimo Séptimo de lo Penal del Distrito Federal copia de la sentencia dictada en la causa penal 331/2005 y de las demás resoluciones recaídas en los medios de defensa interpuestos en contra de esa sentencia



TE DE
NACION
ACUERDOS.

(foja 458 del Tomo II del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

Una vez que la citada Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos recibió las copias solicitadas a la Juez Penal antes mencionada, mediante oficio SEAJ-MAAS/182/2008 de dieciocho de enero de dos mil ocho, comunicó y remitió a la Dirección General de Personal copias certificadas de: **a)** la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil siete en la causa penal 331/2005 en la que se determinó que Aarón Roberto Mariscal Valencia es penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio calificado por lo que se le impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión; **b)** la sentencia emitida en el toca 754/2007 emitida por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se confirmó la sentencia de primer grado; **c)** del proveído de seis de agosto de dos mil siete, en la que se decretó que la resolución causó estado; y, **d)** del oficio de cinco de octubre de dos mil siete en el que el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal informa a Aarón Roberto Mariscal Valencia que se le concedió el tratamiento en externación en relación con la pena privativa de libertad (fojas 225 a 459 del Tomo II del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

SUPLENTE
JUSTI
SECRETARÍA GEN.

Por lo anterior, el veintidós de abril de dos mil ocho el Director General de Personal acompañado por la Directora



CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, levantaron el acta administrativa 1/2008 para asentar lo concerniente y el doce de mayo de dos mil ocho se presentó la demanda laboral en la que se reclamó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia por configurarse la causal prevista en la fracción V, inciso j), del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 387 a 392 del expedientillo formado con motivo del procedimiento para instrumentar el acta administrativa 1/2008, en el anexo dos del legajo de pruebas del actor).

A efecto de valorar las pruebas reseñadas, es necesario atender a las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que establece:

“Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presente, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones que se funde su decisión.”

En mérito de lo precisado, apreciando en conciencia el acervo probatorio allegado al expediente y de la valoración adminiculada de las referidas probanzas, a las cuales se les



otorga pleno valor probatorio, queda acreditado que es hasta el día dieciocho de enero de dos mil ocho en que se tuvo pleno conocimiento de la situación legal de Aarón Roberto Mariscal Valencia y no el diez de mayo o diez de octubre, ambos de dos mil siete, como lo señaló la parte demandada.

Lo anterior en tanto que hasta antes del dieciocho de enero de dos mil ocho, únicamente se tenía conocimiento de que existía la causa penal 331/2005 seguida en contra del demandado Aarón Roberto Mariscal Valencia por el delito de tentativa de homicidio, en virtud de la cual se solicitó por éste la suspensión temporal de la relación laboral; en dicho proceso penal se dictó sentencia el nueve de mayo de dos mil siete y se determinó que Aarón Roberto Mariscal Valencia era penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio calificado por lo que se le impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión.

SU-21
JU
SECRETARÍA

Sin embargo, como se advierte de las pruebas antes narradas, el propio Aarón Roberto Mariscal Valencia, indicó a este Alto Tribunal que había apelado dicha sentencia condenatoria lo que implicaba que la misma estaba subjúdice, sin que con posterioridad se tuviera conocimiento sobre la resolución recaída en el toca de apelación respectivo, dado que aquel servidor público únicamente informó, sin comprobarlo, que el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal le



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

concedió el tratamiento en externación en relación con la pena privativa de libertad.

Lo anterior, cobra relevancia en atención a que para que sea levantada la suspensión temporal y reincorporado el servidor público a sus labores, es necesario tener pleno conocimiento del resultado de la causa penal, pues los artículos 42, fracción III y 43, II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos de su numeral 11, señalan que es causa de suspensión temporal la prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria y que dicha suspensión surtirá efectos desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva que lo absuelva.

Incluso, en el caso, tiene plena aplicación el artículo 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que prevé que la suspensión temporal de los efectos del nombramiento se da por prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria; precepto que en esencia es similar a los de la Ley Federal del Trabajo señalados en el párrafo inmediato anterior.

Aunado a ello, el artículo 46, fracción V, inciso j), de la ley burocrática, prevé que el nombramiento dejará de surtir efectos



CORTE DE
DE LA NACIÓN
MERAL DE ACUERDOS.

sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria, por lo que, para estar en aptitud de demandar la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia, era necesario conocer fehacientemente cuál fue la decisión final en el proceso penal que se le seguía, esto es, la sentencia ejecutoria que se dictó en ese proceso, lo que se conoció hasta el dieciocho de enero de dos mil ocho, cuando la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal comunicó y remitió a la Dirección General de Personal copias certificadas, entre otras, de la sentencia emitida en el toca 754/2007 emitida por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se confirmó la sentencia de primer grado.

Por tanto, la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es a partir del dieciocho de enero de dos mil ocho, fecha en la que la Dirección General de Personal tuvo pleno conocimiento de la causa generadora para demandar la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para este Alto Tribunal.

En ese tenor, si la demanda laboral en la que se solicitó la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento del ahora demandado, se presentó el doce de



SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mayo de dos mil ocho, como se advierte del sello de recibido de la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación (foja uno vuelta de la demanda laboral), es inconcuso que el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no había transcurrido pues, se insiste, el plazo debe computarse a partir del dieciocho de enero de dos mil ocho, fecha en la que se tuvo conocimiento de que causó ejecutoria la sentencia de segundo grado que confirmó la condena del juez penal de primera instancia; por lo que dicho plazo concluyó el dieciocho de mayo del propio año, siendo que la demanda fue presentada el doce de mayo de ese año ante la Comisión Substanciadora.

ORTE DE
NACION
DE ACUERDOS.

Lo anterior, en atención a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley burocrática⁶, los meses para la prescripción se regularán por el número de días que le correspondan y el primer día debe contarse completo y cuando sea inhábil el último día de ese plazo, para que se tenga completa la prescripción, debe estarse al primer día hábil siguiente.

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación

⁶ LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

“Artículo 117. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente.”

“PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA, EN MATERIA LABORAL. El término de prescripción de la acción laboral se computa incluyendo los días inhábiles que en el transcurso de ese lapso hubiere y sólo excepcionalmente se ve ampliado ese término cuando su último día es inhábil.”

(Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 400, Página: 331)

En ese tenor, si la demanda fue presentada el doce de mayo de dos mil ocho, esto es, dentro del plazo para solicitar la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento, debe concluirse que ésta se encuentra en tiempo y, por ende, resulta improcedente la excepción del demandado.

QUINTO. La parte demandada, al inicio de su escrito de contestación a la demanda, hace valer la excepción de falta de acción y derecho.

No obstante, de la lectura de esa excepción se advierte que lo que realmente planteó la parte demandada fue un incidente de falta de personalidad y no la excepción de falta de acción y derecho como lo expresó, ya que incluso en la audiencia de doce de junio de dos mil ocho llevada ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la





172
FORMA A-55
472

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federación, el propio apoderado de la parte demandada precisó: ***“Asimismo, en cuanto al incidente de falta de personalidad de la parte actora a que se hace alusión al inicio de la contestación a la demanda éste resulta procedente en virtud de que...”*** (foja 134 del expediente laboral).

Con motivo de esa manifestación, se tramitó el referido incidente el que se desechó por extemporáneo mediante resolución del Pleno de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, emitida el doce de mayo de dos mil nueve.

Por los motivos antes precisados, no es jurídicamente factible analizar la excepción en comento ya que tal cuestión, se insiste, al tratarse de la personalidad del actor, fue materia del incidente respectivo antes señalado.

SEXTO. Por otra parte, el demandado Aarón Roberto Mariscal Valencia opuso como excepción la de obscuridad e imprecisión de la demanda.

Al respecto, dicha excepción debe declararse infundada pues la procedencia de la referida excepción de obscuridad o imprecisión de la demanda, resulta fundada siempre y cuando la misma demanda se encuentre redactada en forma tal que imposibilite darle contestación por carecer de los elementos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS.

necesarios que permitan entender o conocer ante quién y por qué se demanda, los fundamentos legales o cualquier otra circunstancia que necesariamente pueda influir en el derecho ejercido o en la comprensión de los hechos en los que se sustenta la pretensión, colocando al demandado en un estado de indefensión que le impida oponer las defensas correspondientes.

Asimismo, quien opone dicha excepción no debe limitarse a sostener que la demanda es obscura o imprecisa, sino que debe señalar cuáles son los aspectos en los que falta claridad y las omisiones en que el actor haya incurrido, a fin de que pueda determinarse si la demanda es obscura e imprecisa.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"OBSCURIDAD DE LA DEMANDA, EXCEPCIÓN DE. No basta excepcionarse atribuyendo obscuridad a la demanda, sino que es preciso señalar cuáles son sus aspectos en que falta claridad y las omisiones en que el actor haya incurrido, que colocan en estado de indefensión al demandado." (Sexta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Quinta Parte, LXXIV. Página 30.)





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En este contexto, debe señalarse que en el escrito de contestación respectivo, al oponer la excepción de obscuridad, la parte demandada no precisó los aspectos que adolecen de claridad o las omisiones en que incurrió la parte actora y que, en su concepto, le coloca en estado de indefensión, pues se limita a sostener cuestiones diversas a lo que en esencia demandó la parte actora, esto es, sólo dice que es oscura, vaga e imprecisa la demanda porque cuando solicitó su reincorporación al cargo que ocupaba, la autoridad no le señaló los motivos por los cuales se dejaba sin efecto la suspensión temporal y tampoco le contestó sobre su reincorporación, ni porqué se le mantenía separado, cuestiones diversas a lo contenido en la demanda laboral, lo que conlleva a que esas expresiones, desde luego, carecen de precisión en cuanto a los aspectos de la demanda que son oscuros o de las omisiones en que se incurrió al formularla, motivo éste suficiente para desestimar la excepción.



Además, cabe señalar que los términos en que aparece formulado el escrito de demanda no colocan en estado de indefensión al demandado, dado que dio contestación a la demanda, opuso excepciones y ofreció pruebas contra las pretensiones del actor, con lo que se pone de relieve que los términos en que aparece redactado el escrito inicial no adolecen de claridad y precisión que lo hayan colocado en estado de indefensión, pues es evidente que entendió el contenido y alcance de la demanda entablada en su contra y

rindió los medios de prueba para acreditar las defensas al tenor de las cuales estimó que las prestaciones demandadas son infundadas.

Consecuentemente, resulta infundada la referida excepción de oscuridad e imprecisión en la demanda.

SÉPTIMO. Por último, el actor demanda la terminación de los efectos del nombramiento de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, plaza número 1885, otorgado a Aarón Roberto Mariscal Valencia, en la Dirección General Adjunta de Documentación Jurídica perteneciente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal, ya que el nueve de mayo de dos mil siete, se dictó sentencia por la Juez Décimo Séptimo de lo Penal del Distrito Federal en la causa penal 331/2005 instruída en contra del servidor público Mariscal Valencia, en la que se le condenó a una pena de seis años, ocho meses de prisión; resolución que fue confirmada por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca de apelación 754/2007 y que causó estado por auto de seis de agosto de dos mil siete, lo que permite demandar dicha terminación al actualizarse la causa de cese prevista en el artículo 46, fracción V, inciso j), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.





FORMA A-55
474

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Al respecto, resulta fundada la pretensión hecha valer por la parte actora de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Del artículo 46, fracción V, inciso j), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa y que sólo dejará de surtir efectos el nombramiento de los trabajadores sin responsabilidad para los titulares de las dependencias cuando, entre otros, exista resolución del Tribunal laboral correspondiente en el caso de prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoria. Dicho numeral prevé:

“ARTÍCULO 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

(...)

V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:

(...)

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS.

remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin



SUPREMA CO
JUSTICIA E
SECRETARÍA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos."

Por su parte, del artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que al incurrir el trabajador en alguna causal prevista en la fracción V del artículo 46 de la misma ley, se procederá a levantar acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato, en la que se asentarán con toda precisión los hechos materia del acta, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan y se firmará por los que en ella intervinieron así como por dos testigos de asistencia, debiendo entregar copia del acta al trabajador y al representante del sindicato. Dicha acta será el documento base de la acción para demandar, si a juicio del titular así procede, la terminación de los efectos del nombramiento, caso en el cual se tendrá que acompañar a la demanda dicha acta junto con los documentos que se hayan agregado a la misma al formularse ésta. El referido numeral precisa:

"ARTÍCULO 46 BIS.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDOS.

asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.

Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.”

De los preceptos mencionados, es posible sostener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de patrón equiparado, sólo podrá cesar a un trabajador si existe una justa causa, como lo es la de prisión del trabajador que sea resultado de una sentencia ejecutoria, pero para que sea calificada como causa justa es necesario que se demande ante el Tribunal laboral correspondiente y éste así lo resuelva con base en los elementos aportados, entre los que se encuentra el acta administrativa levantada en la forma y términos que lo establece el propio artículo 46 bis de la legislación burocrática; acta que deberá acompañarse a la demanda como documento base de la acción.



SUPREMA C
JUST
SECRETARÍA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Así, para determinar si existe causa justa para dar por terminado los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia, resulta indispensable tomar en cuenta las pruebas aportadas en el juicio laboral y de esta forma estar en posibilidad de sostener si la causa por la que se demanda la referida terminación del nombramiento se actualiza en el caso concreto.

Al respecto, de los medios probatorios aportados por la parte actora se desprende lo siguiente:

El once de septiembre de dos mil seis, Aarón Roberto Mariscal Valencia presentó escrito ante la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, en el que solicitó la suspensión temporal de la relación de trabajo dado que se encontraba detenido a disposición de autoridad judicial (foja 181 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

El mismo día once de septiembre de dos mil seis, mediante oficio DGP/DRL/245/2006, la Dirección General de Personal informó a la Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes que la suspensión temporal de los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia surtía sus efectos a partir del ocho de septiembre de ese año y la requirió para que en su



RTE DE
IACION
DE ACUERDOS.

momento se informara a esa Dirección General la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que absuelva al referido servidor público (foja 185 y 184 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).

Previo requerimiento, Aarón Roberto Mariscal Valencia remitió, mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil siete, copia simple del tratamiento de externación contenido en el oficio SSG/DESP/4026/2007 de cinco de octubre de dos mil siete expedido por el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, en el que al parecer ese beneficio le fue otorgado a Aarón Roberto Mariscal Valencia en la causa penal que se le instruyó, sin comprobación fehaciente dado que sólo exhibió copia simple de ese documento (fojas 210 a 214 del tomo I del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora).



SUPLENTE
JUSTI
SECRETARÍA GENERAL

El dieciocho de enero de dos mil ocho, la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal remitió a la Dirección General de Personal copias certificadas de: **a)** la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil siete en la causa penal 331/2005 en la que se determinó que Aarón Roberto Mariscal Valencia es penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio calificado por lo que se le impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión; **b)** la sentencia emitida en el tomo 754/2007 emitida por la Cuarta Sala Penal

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se confirmó la sentencia de primer grado; c) del proveído de seis de agosto de dos mil siete, en la que se decretó que la resolución causó estado; y, d) del oficio de cinco de octubre de dos mil siete en el que el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal informa a Aarón Roberto Mariscal Valencia que se le concedió el tratamiento en externación en relación con la pena privativa de libertad (fojas 225 a 459 del Tomo II del expediente personal que se encuentra en el anexo dos del legajo de pruebas de la parte actora así como de las copias certificadas que se encuentran en el anexo tres de las pruebas ofrecidas por el actor).

ORTE DE
NACION
DE ACUERDOS.

El veintidós de abril de dos mil ocho se llevó a cabo el levantamiento del acta administrativa 1/2008, en la que se hicieron constar los hechos y el motivo del procedimiento pues se señaló: "...haber sido condenado por el término de seis años, ~~ocho~~ meses por el delito de tentativa de homicidio calificado, conducta que podría configurar alguna de las causas contempladas en la fracción V, inciso j) del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado..." (fojas 387 a 392 del expedientillo formado con motivo del procedimiento para instrumentar el acta administrativa 1/2008, en el anexo dos del legajo de pruebas del actor).

A efecto de valorar las pruebas reseñadas, como ha quedado señalado con anterioridad, es necesario atender a las

reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que establece:

“Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presente, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones que se funde su decisión.”

Así, de los documentos precisados se advierte, en lo que interesa, lo siguiente:

El nueve de mayo de dos mil siete la Juez Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal dictó sentencia condenatoria en la causa penal 331/2005 seguida en contra de Aarón Roberto Mariscal Valencia, en la que se le impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión, por la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado.

El primero de agosto de dos mil siete la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó resolución en el toca de apelación 754/2007 en el que confirmó la pena de prisión impuesta a Aarón Roberto Mariscal Valencia en la causa penal 331/2005.



SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARÍA DE



478
FORMA A-55
478

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El seis de agosto de dos mil siete, la Juez Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal acordó que causó estado la resolución del referido Tribunal de apelación.

Mediante oficios SSG/DESP/4025/2007 y SSG/DESP/4026/2007, ambos de cinco de octubre de dos mil siete, suscritos por el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, se concedió a Aarón Roberto Mariscal Valencia el tratamiento en externación en relación a la pena privativa de libertad impuesta en la causa penal 331/2005.

Por ello, de los elementos que sirvieron de prueba y que quedaron precisados con antelación, es dable concluir que Aarón Roberto Mariscal Valencia se ubica en el supuesto previsto en el inciso j), fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ya que en la causa penal 331/2005 que se le instruyó por el delito de tentativa de homicidio calificado, se dictó sentencia que lo condenó a seis años, ocho meses de prisión, la cual fue confirmada en el toca de apelación 754/2007 y causó estado el seis de agosto de dos mil siete.

Con lo anterior, se desprende que la pena de prisión impuesta a Aarón Roberto Mariscal Valencia es resultado de una sentencia ejecutoria, lo que implica que se pueden dar por terminados los efectos de su nombramiento sin responsabilidad para este Alto Tribunal, ya que el ahora demandado se ubicó en



CORTE DE
LA NACIÓN
BAL DE ACUERDOS

una de las causales por las cuales se exime de responsabilidad al patrón equiparado para dar por terminados los efectos de su nombramiento, al actualizarse, específicamente, la causa de cese señalada en el referido artículo 46, fracción V, inciso j), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que ha quedado transcrito con anterioridad.

Cabe señalar que al momento en que el Director General de Personal tuvo pleno conocimiento de que la sentencia condenatoria había causado estado, derivado de las copias certificadas que la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal le remitió, se llevó a cabo el procedimiento previsto en el artículo 46 bis de la ley de la materia, ya que se citó tanto al servidor público demandado como al representante del Sindicato y el día veintidós de abril de dos mil ocho se levantó el acta administrativa en donde se hicieron constar los hechos; se dio intervención al servidor público Aarón Roberto Mariscal Valencia quien manifestó lo que a su derecho convino, así como al representante sindical; se designaron testigos de asistencia; se le hizo saber al servidor público aquí demandado, en forma puntual el motivo del procedimiento pues se señaló: *“...haber sido condenado por el término de seis años, ocho meses por el delito de tentativa de homicidio calificado, conducta que podría configurar alguna de las causas contempladas en la fracción V, inciso j) del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado...”*; hubo testigos de cargo pero no de descargo pues no fue interés de



SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARÍA GENE



479
FORMA A-55
979

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mariscal Valencia señalarlos; dicha acta fue firmada por los que intervinieron en la misma y se otorgó copia de ésta tanto al referido servidor público como al representante del Sindicato.

Incluso, de la lectura de esa acta se desprende que el procedimiento para levantarla se apegó a la normativa de este Alto Tribunal, específicamente al Acuerdo General de Administración I/2007 que en sus artículos 32 a 38 prevén, en esencia, el procedimiento a seguir para levantar actas administrativas cuando se pudiera configurar alguna de las causas de cese previstas en el artículo 46, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Con lo anterior se estima que se actualizan los supuestos previstos en las normas indicadas y, por ello, resulta fundada la pretensión del actor y, en consecuencia, se debe autorizar la terminación de los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia como profesional operativo, sin responsabilidad para la parte actora.

No es óbice a lo anterior que mediante oficios SSG/DESP/4025/2007 y SSG/DESP/4026/2007, ambos de cinco de octubre de dos mil siete, suscritos por el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, se le haya concedido a Aarón Roberto Mariscal Valencia el tratamiento en externación en relación a la pena privativa de libertad impuesta en la causa penal 331/2005, dado que la Ley Federal de los Trabajadores al



CORTE DE
NACIÓN
L. DE ACUERDOS.

Servicio del Estado es clara al señalar que será causa de terminación de los efectos del nombramiento respectivo, la prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoria, como en el caso ocurrió, sin que pueda estimarse que el citado sustitutivo de la pena de prisión desvirtúa la naturaleza de la sanción impuesta en la sentencia condenatoria que es, finalmente, la que debe considerarse para efectos del cese.

En efecto, la referida causa de cese prevista por el artículo 46, fracción V, inciso j), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se actualiza a pesar de que al inculcado se le otorgue algún beneficio sustitutivo de la pena de prisión, como en el caso lo fue el tratamiento en externación, toda vez que esta circunstancia sólo constituye una forma de extinguir la pena corporal o de cumplir una sentencia sujeta a determinadas modalidades mas no que el trabajador inculcado haya sido absuelto, como lo requieren las normas laborales tanto para la reincorporación a sus labores después de una suspensión temporal como para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público, sin responsabilidad para el titular de la dependencia respectiva.



SUPREMA CO
JUSTICIA F
SECRETARIA GEN

Por lo considerado, resulta fundada la pretensión del actor y, por tanto, se autoriza la terminación de los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia en el cargo de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, plaza número 1885, con adscripción en la Dirección General Adjunta



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de Documentación Jurídica perteneciente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal, sin responsabilidad para el actor.

Por lo expuesto, y además con apoyo en lo previsto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. El actor TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN acreditó su pretensión y el demandado no acreditó sus excepciones y defensas.

SEGUNDO. Se autoriza la terminación de los efectos del nombramiento de Aarón Roberto Mariscal Valencia en el cargo de Profesional Operativo, rango F, puesto de base, plaza número 1885, con adscripción en la Dirección General Adjunta de Documentación Jurídica perteneciente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de este Alto Tribunal, sin responsabilidad para el actor TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.



ORTE DE
NACION
ACUERDOS.

TERCERO. Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas y, en su oportunidad, lo archive como asunto concluido.

CÚMPLASE.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.



SUPREMA C
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GENERAL

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**


MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA



401
FORMA A-55
481

CONFLICTO DE TRABAJO 2/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


LIC. RAFAEL COELLO CETINA



CORTE DE
NACION
DE ACUERDOS.

SENTENCIA

La presente foja es la parte final de la resolución en el Conflicto de Trabajo 2/2008-C, promovido por Aarón Roberto Mariscal Valencia.- Conste.


S